

MANIFIESTO AL PAIS

PANAMA ATRAPADO POR CLANES DE LA MAFIOCRACIA



En un abrir y cerrar de ojos han transcurrido ya más de seis meses del nuevo gobierno. Una alianza de propietarios de medios de comunicación que hacen parte directa o indirectamente del gobierno, ha servido para ocultar algunas realidades a la opinión pública durante todo este tiempo.

Crisis institucional

La grave crisis institucional que se ha venido profundizando durante los últimos años está lejos de superarse. La percepción de un sector importante de la sociedad, es que el Ejecutivo sigue interviniendo en los otros órganos del Estado. Eso ha quedado muy claro con las designaciones del Contralor, la Procuradora (ex funcionaria del Presidente en el Consejo de Seguridad Nacional) y el Procurador de la Administración Pública, sin las debidas consultas que se prometieron en campaña política. Agréguele a eso la imposición a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por parte del Ejecutivo de un Magistrado del Tribunal de Cuentas. Los órganos del Estado vuelven a estar sometidos al chantaje y los sobornos del poder Ejecutivo. Magistrados confiesan abiertamente que en la CSJ se archivan expedientes y se venden fallos y diputados reconocen reuniones con el Ejecutivo donde se ofrecen proyectos a cambio de apoyo a medidas gubernamentales. Por eso no quieren cerrar el PAN.

Agreguemos a esto el caso del Tribunal Electoral. El supuesto árbitro de las contiendas electorales, nunca como antes en estos 25 años, se ha plegado abiertamente al Ejecutivo y eso ha determinado algunas de sus últimas decisiones, con el agravante de la ratificación por 10 años más de un magistrado que ya tiene 25 años en el cargo, con lo cual ha sido nombrado prácticamente de manera vitalicia, y el nombramiento de familiares de todos los magistrados de dicho Tribunal en el gobierno.

Estamos a punto de concluir el proceso electoral más largo de nuestra historia, más de ocho meses después del 4 de mayo. Ante la vista de las autoridades los partidos tradicionales hicieron uso de recursos del Estado para quebrantar la voluntad popular, cometer fraude e irregularidades. Más de 400 millones del

PAN fueron usados por los diputados de la pasada Asamblea Nacional en su campaña de reelección. 36 de ellos se reeligieron, más de la mitad, y uno de ellos se convirtió en alcalde capitalino.

En las elecciones parciales celebradas posteriormente presenciamos de todo. Se entregaron curules de manera ilegal, se permitió correr a candidatos a los que se les comprobó graves delitos, se volvieron a usar de forma descarada recursos públicos y privados en la compra de votos y se consintieron alianzas políticas entre partidos, extemporáneas e ilegales.

Nunca, como en estas últimas elecciones, los medios se cuadraron a favor de algún candidato. La opinión pública supo de antemano quién era el candidato presidencial de cada canal de televisión, radios y medios escritos, y eso influyó de manera determinante en el voto ciudadano.

El gobierno ha venido sosteniéndose sobre la base de un Pacto de Gobernabilidad, que no es más que un acuerdo para repartirse embajadas, consulados, notarías, gobernaciones, curules de diputados y otros cargos. El nepotismo ha persistido en las altas esferas del gobierno, incluidos familiares del propio Presidente.

Con nombramientos y cooptación se ha silenciado a sectores de la denominada sociedad civil que antes buscaban cumplir una especie de papel fiscalizador de la gestión pública

A S A M B L E A
Constituyente Originaria
Autoconvocada y con plenos poderes

Hemos llegado al derrumbe de las instituciones. Al ocaso de esta seudo democracia que impusieron las tanquetas gringas hace 25 años y que muchos sectores del pueblo vieron con esperanza tras la oscura noche de la dictadura militar.

Para la Partidocracia y los sectores económicos dominantes, la “democracia” funciona porque hay elecciones y el pueblo elige cada cinco años a sus gobernantes, independientemente de las condiciones en que realiza este ejercicio. Bajo ese esquema solo importa el voto del pueblo, al que marginan posteriormente de la toma de decisiones que le deberían dar sentido a una democracia integral.

Y así hemos llegado al derrumbe de las instituciones. Al ocaso de esta pseudo democracia que impusieron las tanquetas gringas hace 25 años y que muchos sectores del pueblo vieron con esperanza tras la oscura noche de la dictadura militar.

Por ello, desde FRENADESO insistimos en la organización del pueblo, en la construcción de poder popular y en crear las condiciones para la autoconvocatoria por parte del pueblo de una Asamblea Constituyente Originaria con plenos poderes que funde una nueva República, una Patria de todos.

Lo otro, es decir, reformas constitucionales o constituyente paralela, sería dejar las decisiones en manos de los políticos tradicionales de siempre, cuyos objetivos, muy distinto a los intereses populares, es amoldar la Constitución a los requerimientos del modelo neoliberal y establecer mecanismos para dirimir sus diferencias y redistribuirse cuotas de poder, que al final impondrían mediante su viejas fórmulas de manipulación mediática y clientelismo político.

Escándalos en la palestra

En este período y más en estos últimos días, cual espectáculo televisivo, el pueblo ha sido testigo de la apertura de procesos contra funcionarios del pasado gobierno.

Hemos presenciado a fiscales actuando ante los medios, a acusados brindando entrevistas desde sus lugares de arresto y a supuestos testigos protegidos desfilar por las cámaras, como parte de un guión previamente concebido para fabricar expedientes. En algunos casos se actúa como si se buscara que por meros formalismos los procesos se derrumben. En otros, se intentan sentar las bases de un terrorismo judicial que en el pasado ha sido usado para perseguir a luchadores sociales, dirigido selectivamente a algunos personajes del gobierno pasado mientras se excluyen a otros que hoy se alinean al nuevo gobierno y a ciertas figuras que en pasados gobiernos cometieron delitos similares y hoy los medios presentan como personas impolutas, principalmente expresidentes de la república, ex ministros, ex magistrados, diputados, ex contralores

y dirigentes de partidos tradicionales reconocidos por la corrupción, el latrocinio y las violaciones a los derechos humanos en que incurrieron.

Se actúa con irresponsabilidad y, como ha ocurrido en el pasado, determinadas firmas de abogado ofrecen sus oficios e influencias, negociando en los tribunales corruptos beneficios para sus clientes y obteniendo jugosas ganancias de fondos obtenidos del atraco al erario público.

Para la población “no están todos los que son ni son todos los que están”. Y eso es así porque no se ha visto comparecer a reconocidas figuras del pasado gobierno, como por ejemplo, el Ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, sólo se han detenido a dos de los cinco secretarios del Consejo de Seguridad Nacional, y no se conoce aún de ningún intento serio para actuar directamente contra Ricardo Martinelli, el principal responsable de los casos de corrupción y de violar la privacidad de un número plural de panameños.

Pero, además, no se ha actuado contra ninguno de los funcionarios del actual gobierno que fungieron durante el período de 26 meses de responsabilidad compartida en el gobierno entre el Partido Panameñista y Cambio Democrático, como es el caso de los miembros de la Junta Directiva del PAN que aprobaron la compra del equipo de espionaje, las mochilas, comida deshidratada, autorizaron las partidas circuitales y otros, entre los que figuran ministros (Dulcidio De La Guardia y Alcibiades Velásquez), diputados (Popi Varela), funcionarios (Susy de Varela, cuñada del Presidente) y dirigentes del Partido Panameñista (Alberto Vallarino), incluidos también el asesor de campaña de Varela, Jimmy Papadimitriu, y una miembro de la secta del Opus Dei a la que pertenece el Presidente, la ex ministra Lucy Molinar. Una investigación sería debería incluir, además, a las empresas y bancos que se beneficiaron del robo del PAN y de los sobre costos en las obras.

Tampoco se evidencian acciones contra los responsables de crímenes de lesa humanidad como las masacres de Changuinola, San Félix, Colón, ni los quemados del Centro de Menores de Tocumen, ni las numerosas víctimas de la brutalidad y abuso policial.

Y menos hemos visto diligencias para actuar contra violadores de los derechos humanos, pinchadores y corruptos de gobiernos anteriores, quienes se han beneficiado todos estos años del reino de impunidad que existe para los delincuentes de cuello blanco que hicieron de la gestión pública una fuente de enriquecimiento.

En el marco de esta institucionalidad podrida, es muy difícil que la mano de la justicia llegue a todos los responsables de tantos delitos. No podemos confiar en que la justicia la van a defender magistrados, diputados, y miembros del Ejecutivo, quienes también tienen las manos sucias del robo, el crimen y la corrupción. Es como poner a la zorra a cuidar de las gallinas.

Lo que presenciamos es el enfrentamiento entre clanes de la mafocracia que han manejado los distintos gobiernos. Siendo así, la justicia real que anhelan los panameños seguirá siendo una quimera. Ahora se actúa con meros cálculos politiqueros, vendetta y para fomentar los conocidos shows mediáticos y la disputa por los ratings televisivos.

Más neoliberalismo

Toda la hojarasca mediática ha valido para ocultar graves problemas que se ciernen sobre la población y medidas que afectan directamente las condiciones de vida de los panameños.

El alza de la tarifa eléctrica, en medio de la caída brusca del precio del barril del petróleo a nivel mundial y con los embalses a su máxima capacidad, constituye un hurto a la población y un mayor encarecimiento del costo de la vida, ya que como sabemos los empresarios siempre aprovechan cualquier situación para traspasar sus costos al consumidor, sin afectar sus márgenes de ganancia o incrementarlos.

Por otra parte, funcionarios de gobierno admiten ya públicamente que se preparan nuevas reformas a la seguridad social, que pueden implicar modelos de privatización, aumento de la cuota obrera e incremento de la edad de jubilación, por lo que los trabajadores debemos declararnos en estado de alerta, en momentos en que persiste la pésima atención a los asegurados, salones de operación que no funcionan, desabastecimiento de medicamentos, situación no superada de bacterias, falta de personal y equipos médicos; aires acondicionados dañados y solo 29 de 90 ambulancias funcionando.

En materia educativa no se vislumbra nada distinto al proyecto que impulsaba la ex ministra de Educación, Lucy Molinar. Por el contrario, lo que observamos de su ex asesora y hoy ministra, es el desarrollo de una política educativa en detrimento de la calidad de la enseñanza pública y el fomento de carreras técnicas o vocacionales al servicio de los requerimientos del empresariado interesado en hacerse de mano de obra barata. A los propietarios de colegios privados se le

permiten incremento de costos y otras arbitrariedades en detrimento de los sectores de capas medias y profesionales, a la vez que se fortalecen particularmente aquellas donde las clases pudientes envían a sus hijos, alargando así la distancia entre la educación de los pobres y la educación de los ricos en Panamá.

A todo esto, hoy todavía miles de educadores esperan los anunciados aumentos salariales y muchas escuelas presentan serias deficiencias de infraestructuras a apenas unos cuantos días de iniciarse el calendario escolar.

Hay el interés del nuevo gobierno en desarrollar Colón Puerto Libre, como una especie de enclave empresarial, donde se desconocerían derechos fundamentales de los trabajadores establecidos en el Código de Trabajo y otras leyes de la república, mediante el establecimiento de un régimen especial para beneficio de la patronal.

Se impulsan los proyectos depredadores del ambiente como la interconexión eléctrica con Colombia, Barro Blanco y Chan II.

Persisten y se agravan los problemas de seguridad en las calles, falta de agua potable y servicios básicos en comunidades; crisis y encarecimiento del transporte público y se mantiene la lucha por tierra para vivir y trabajar, mientras sigue el abandono del sector agropecuario y continúan las privatizaciones (puerto de Corozal, Metro S.A., Tocumen, etc.)

Se pretende afianzar este modelo de “desarrollo” que privilegia un crecimiento económico en beneficio de unos pocos, los 115 ultra millonarios, aumenta la concentración de riqueza y amplía la inmensa desigualdad social.

El Canal

No podemos pasar por alto el tema del proyecto de ampliación del Canal ni dejar de denunciar las mentiras de la directiva de la ACP que actúa en función de las ambiciones de grupos oligárquicos, los intereses norteamericanos y de las grandes compañías navieras.

Una vez más la historia vuelve a darle la razón a FRENADESO cuando advirtió al pueblo que el proyecto sería mucho más caro de lo que nos decían y que se haría en un tiempo mayor a lo que nos plantearon cuando el referéndum sobre el Canal.

Ahora, no solo el proyecto exhibe un atraso significativo, sino que también la ACP, con recursos que deben servir para resolver acuciantes necesidades de la población, comenzará a pagar cientos de millones al consorcio que construye la obra, tal como habíamos señalado. Es decir, no solo financiamos al Grupo Unidos por el Canal (GUPEC) y le pagamos por adelantado, sino que ahora premiamos el atraso y su inoperancia con una cifra astronómica en sobre costos.

Y eso se lo permiten los directivos de la ACP sin que pase nada, pues cada gobierno que llega les ha concedido la prerrogativa de manejarse como si fuera una república aparte, otro enclave dentro de nuestro propio territorio, otra Zona del Canal, como una afrenta a los humildes panameños que cayeron en aras de nuestra soberanía total hace 51 años.

Todo esto ocurre cuando conocemos que los altos ejecutivos de la ACP en 10 años de han repartido más de 25 millones de dólares en bonos y a los trabajadores en 15 años solo se les ha aumentado 83 centavos por lo cual se mantienen luchando.

Organización y Lucha

Ante este panorama reiteramos la necesidad del pueblo a organizarse de manera independiente de los políticos tradicionales y de seudos independientes que responden por igual a los mismos intereses económicos que controlan la Partidocracia.

Ello a la larga debe permitirnos conquistar una auténtica democracia como resultado de una Asamblea Constituyente Originaria con plenos poderes que nazca del pueblo soberano y no de los políticos corruptos.

Lo que el país vive hoy es el resultado de más de 25 años de desilusiones y de engaños de un pueblo que cada 5 años acude a las urnas a elegir a sus nuevos verdugos.

Martinelli fue el resultado de la frustración de un pueblo en los políticos tradicionales y del engaño publicitario que lo presentó como algo distinto a pesar de haber sido amamantado por los gobiernos anteriores del PRD y Panameñista que hoy hacen parte del Pacto de Gobernabilidad.

Pero no debemos olvidar que por sed de poder, este capítulo trágico de nuestra historia, comenzó a escribirse en la Embajada de Estados Unidos cuando Varela selló con Martinelli su famosa alianza electoral

en 2009. No olvidemos su corresponsabilidad en muchos de los hechos que hoy se denuncian durante los 26 meses de gobierno común.

Cuando en otro abrir y cerrar de ojos se acabe, como siempre, este enamoramiento del gobierno y los propietarios de medios de comunicación, entonces estaremos viviendo otro momento de desencanto de la población. Estos dueños de medios desde ya promueven sus figuras de relevo para 2019, como lo hicieron el 4 de mayo, especialmente de un sector del PRD y seudo independientes; de allí la frecuente visitas a sus espacios televisivos y radiales de Ernesto Pérez Balladares, Martín Torrijos y otros ex funcionarios a los que ahora pretenden vender como impolutos pese a que todo Panamá reconoce su trayectoria de corrupción. Pero los pueblos se cansan.

Solo la lucha organizada de los pobres, trabajadores y profesionales honestos garantizará justicia real, igualdad, inclusión social, plena soberanía y verdadera democracia. En ello seguimos empeñado y utilizaremos todas las formas de lucha a nuestro alcance para lograr esos objetivos.

¡Sin Luchas no hay Victorias!

¡La Pelea es Peleando!

**Por una Asamblea Constituyente Originaria
autoconvocada y con plenos poderes!**

Panamá, 14 de enero de 2015

FRENADESO

FRENTE NACIONAL POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS ECONOMICOS Y SOCIALES



Directiva del PAN cuándo se compró el equipo de espionaje:

Alberto Vallarino, Guillermo Ferrufino, Lucy Molinar, Pepe Suárez, Jimmy Papadimitriu, Dulcidio De La Guardia, Popi Varela y Alcibiades Velásquez

4 son panameñistas (2 de ellos ministros, Vallarino Vicepresidente del Partido Panameñista y el otro es diputado y hermano del Presidente); Molinar es Opus Dei y Papadimitriu asesor de campaña de Varela.

¿También serán indagados?

